

XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

Zimbabue: política contemporánea, el problema de la Reforma Agraria.

Uncal, Lucía.

Cita:

Uncal, Lucía (2009). *Zimbabue: política contemporánea, el problema de la Reforma Agraria*. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-008/876>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Zimbabue: política contemporánea, el problema de la Reforma Agraria

Uncal, Lucía

INTRODUCCIÓN

Zimbabue, otrora potencia africana, es reconocido desde hace unos años como un país caótico, donde las sequías, el VIH-SIDA (que deja huérfanos a 20% de los menores de 18 años), la baja esperanza de vida (33 años), el hambre y la violencia política son las noticias a la orden del día. Instituciones internacionales como el FMI, gobiernos de Occidente y medios de comunicación, acusan al presidente zimbabwense, Robert Mugabe y las políticas de su gobierno como los responsables de esta situación. Entre éstas, la más controversial: la intensificación fast track de la reforma agraria, aplicada entre los años 2000 y 2003 que revirtió la desigual distribución de tierras, acusada de destruir la próspera agricultura del país. Debido a esta reforma, el régimen encontró el castigo de los acreedores internacionales (estatales y privados), quienes le han denegado al gobierno de Zimbabue toda ayuda financiera, como parte de un programa de sanciones económicas al régimen. Del mismo modo, el gobierno de Estados Unidos, en su papel de garante de la paz mundial ha declarado a este país como “puesto de avanzada de la tiranía”.

En este trabajo se intentará matizar dichas críticas, a la vez que se desarrollará un análisis histórico del devenir político zimbabwense desde el periodo colonial, para introducir la problemática de la reforma agraria en el período independiente.

PERÍODO PRE-INDEPENDIENTE: de la colonia a la guerra civil, 1890-1979

Con el objetivo de contrarrestar el poder de Bélgica y Alemania y con la esperanza de encontrar oro, la British South Africa Company, fundada por Cecil Rhodes, adquiere tierras a los jefes tribales. Estas tierras son bautizadas Rhodesia del sur, en honor a su colonizador, en 1890. Los colonos blancos ocupan las mejores tierras y cuatro años después, obligan a los nativos a vivir en reservas comunales, configuradas de tal forma que no existiera cooperación entre ellas, sembrando la competencia por etnia (Ndebele y Shona) o por área.

Sin embargo, entre 1896 y 1897, ndebeles y shonas se levantan contra el régimen, siendo terriblemente reprimidos.

En 1923, con el voto de los colonos blancos, Rhodesia del Sur se declara Colonia de administración propia, con lo cual la figura del gobernador se configura como el representante de

la Corona Británica y responde ante la Commonwealth Relations Office. De esta forma, la suma del poder se concentra en manos de los colonos blancos, quienes a partir de 1930 pudieron ocupar “legalmente” las mejores y más extensas tierras.

A partir de 1953, el gobierno inglés decide crear la Federación Centroafricana. El objetivo de dicha medida era el de contrarrestar los nacionalismos africanos y afrikáner, y el de crear una estrecha red económica entre sus colonias subsaharianas. De esta forma los puntos “fuertes y ventajosos” de cada dependencia se complementaban. Rhodesia del Sur donde se concentraba la población blanca, Rhodesia del Norte, con grandes yacimientos mineros y Nyassalandia, donde se encontraba la población negra (mano de obra barata) respondían al mismo gobierno, centrado en la primera de ellas.

La Federación era gobernada por una Asamblea Federal, conformada por 35 miembros de los cuales 26 representaban a los europeos, y 9 a los africanos (tres de estos representantes eran europeos). De esta forma, aunque las mayorías contaban con “representación” en la Asamblea, es evidente que el poder era monopolizado por los colonos blancos.

Este monopolio del poder político y económico se traducía en desigualdad social. A la par que los blancos poseían el 50% de las tierras, la población negra comienza a sufrir la segregación racial. Esta situación de discriminación, aunque menos terrible y totalitario si se lo compara con el Apartheid sudafricano, se extendió en el plano espacial (lugares específicos para blancos y para negros), en el laboral (sueldos más bajos para los africanos), en el político (alejamiento de las poblaciones nativas de la política) y en el urbano, con la creación de townships (de naturaleza mejor organizada que en el país vecino, y por lo tanto menos violentos en su aplicación).

Sin embargo, este sistema se debilitó a partir de 1957, especialmente en lo que refiere al espacio público, (aunque de todas formas los africanos no podían poseer terrenos urbanos), y a la apertura electoral que funcionaba sólo para un cierto grupo “educado” de africanos, por lo que esta era una apertura inofensiva para el poder establecido.

La Federación llega a su fin en 1963, debido a los procesos independentistas ocurridos en Rhodesia del Norte y Nyassalandia, rebautizados luego, Zambia y Malawi. Este no es el caso de Rhodesia del Sur, a quien se le niega la independencia, debido a que el gobierno no accede a las condiciones impuestas por Inglaterra, las cuales consisten principalmente en la elección por sufragio universal.

Esta situación se ve estancada, hasta que dos años después, el primer ministro rhodesiano, Ian Smith, declara la independencia unilateralmente, instaurando la República de Rhodesia y conservando el gobierno minoritario.

Ante estas nuevas situaciones de opresión y discriminación e influenciados por las ideas nacionalistas y revolucionarias que recorren el continente, son los jóvenes quienes conforman los grupos de resistencia. Estos se configuran como dos grupos guerrilleros Zanla, afiliado con el partido ZANU, de la etnia shona (donde participa el futuro presidente Robert Mugabe) y Zipra, afiliado al ZAPU, de la etnia ndebele.

Ambos grupos armados cuentan con gran apoyo dentro de la población, entre ellos la de los espiritistas, de gran importancia puesto que son referentes de la comunidad.

El enfrentamiento con el gobierno no parece beneficiar a ninguno de los dos bandos, continuando esta ambigua situación hasta 1975, año en que la Independencia de Mozambique, permite a los guerrilleros reorganizar su estrategia infiltrándose desde ese territorio. a partir de esta situación favorable las acciones de los grupos armados comienzan a ser una verdadera amenaza.

Para poner fin a la escalada de violencia, Inglaterra promueve el diálogo entre las facciones y en 1979 se llega a un acuerdo, que desemboca en la firma de los acuerdos de Lancaster House, que abren paso a las elecciones. Aunque ambos bandos se creen con posibilidades de ganar, quien se alzó con el poder fue el partido ZANU dirigido por Robert Mugabe, representante de la mayoría shona, en 1980.

PERÍODO INDEPENDIENTE: la reforma modernista, 1980-1999

La nueva década se abre con muchas expectativas para el país, y especialmente para el nuevo gobierno. La economía se mantenía firme gracias al desarrollo de la agricultura de exportación, basada en grandes granjas comerciales, y a la importante industria, producto de la sustitución de importaciones de la década del 1950.

Estas perspectivas favorables conducen al gobierno a ciertas políticas positivas como la construcción de escuelas, caminos y hospitales. Sin embargo, el principal aspecto que demarcaría un quiebre con el régimen anterior, el que distinguiría a una nueva fase más distributiva e igualitaria, era, sin ninguna duda, la aplicación de la reforma agraria (como símbolo y como medida de justicia social). Esta política se hace tan necesaria debido al evidente transfondo colonialista existente en la propiedad de la tierra, ya que, para 1980, 4.500 granjeros blancos poseen el 40% de las tierras, que son las de mayor calidad, mientras que el resto de la población negra, a grandes rasgos, vive y produce en las áreas comunales, improductivas para cultivos a gran escala, apaleadas por falta de recursos, superpoblación y climas opresivos.

Dos fuerzas presionan al gobierno para que se aplique la reforma agraria. Éstas están constituidas por nuevos actores, incluidos dentro del espectro político del gobierno, por lo que

cuentan con una nueva representatividad e influencia; estos son: los ex-guerrilleros y los hombres de negocios nativos.

Respondiendo a estos factores, el gobierno comienza la ejecución de la tan esperada medida. No lo hace sólo, sino que Inglaterra lo acompaña, supervisa y financia a través de los acuerdos de Lancaster House, aquellos que un año antes habían permitido la apertura electoral. Dentro de este marco se concluye que la redistribución se hará a partir de la venta de las tierras inutilizadas (por lo granjeros blancos), bajo el principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto”, siendo, legalmente, el estado zimbabwense la primera opción como comprador. Sin embargo, el acuerdo posee ciertas trabas a la hora de poner en práctica las compras. Por un lado, el vencimiento de la resolución se fechó para el año 1990, acortando la posibilidad en el tiempo de la reforma efectiva. Por el otro, la población blanca, representantes de los intereses de los granjeros comerciales, poseían el 20 % de las bancas de la Casa de la Asamblea, por lo que podían vetar la compra de ciertas granjas.

A partir de 1981, el modelo económico comienza su transformación. Mientras que la industrialización fija su producción para la exportación, el gobierno intenta desarrollar la obtención de excedentes por parte de las tierras comunales, para incorporarlas al mercado productivo nacional, en un intento de contrarrestar la importancia de las granjas comerciales y garantizar la seguridad alimenticia y financiera del país.

En este sentido, las áreas comunales sufren ciertos cambios tales como la individualización de parcelas, a través de certificados de utilización, y la especificación de lugar de pasturas y cultivos. En cuanto a los campesinos, estos son beneficiados con créditos estatales, lo que produce un proceso de monetarización, que, junto con la adquisición de medio de comunicación y tecnología agraria (proporcionados por el Estado), permite la inserción del sector rural dentro de las redes de comercialización, gracias a la posibilidad real de generar excedente.

Sin embargo, los alcances de esta inclusión no son tan amplios como se desea, y comienzan a sufrirse consecuencias no deseadas. El aspecto negativo de la monetarización es que abre paso a una estratificación interna dentro del sector rural pobre, ya que los campesinos que no pueden originar una sobreproducción, debido a la falta de tierra o a las malas condiciones climáticas, no pueden ser captados ni por el mercado agrícola ni por el mercado asalariado, saturado para ese entonces. A su vez, los programas de relocalización de familias en las nuevas tierras, aunque constantes, no responden a una planificación profunda, pensada a largo plazo, por lo que se demuestra ineficiente. Para el período de 1982/83 y 1984/85, se promete reubicar a 162.000 familias, tarea que nunca se completa. En consecuencia, la demanda de nuevas tierras y el desempleo crecen a la par.

Como respuesta a la creciente necesidad de tierras, los ex-combatientes, inicialmente promovedores de la reforma, acentúan las ocupaciones, acciones que llevan a cabo desde el comienzo del período independiente. Este grupo, en uno de los más vulnerables, ya que la mayoría no fueron captados ni por el Estado ni por el mercado laboral.

En los albores de la década siguiente, los acuerdos de Lancaster House llegan a su fin, al igual que el apoyo económico del gobierno inglés, que prácticamente desaparece. El saldo de la reforma agraria para ese año es desalentador. Debido a las disposiciones de aquella legislación, el proceso se lentificó y obstruyó, cayendo la venta de tierras de 430.000 a 75.000 por año. La causa principal es que la naturaleza de la reforma aplicada por el Estado no podía sortear los obstáculos impuestos por los granjeros comerciales, quienes tenían actitudes tales como rehusarse a vender sus tierras, especular los precios de venta, o bien vender las peores. Estas maniobras eran legitimadas y respaldadas por importantes instituciones, financieras y de diferentes órdenes, interesadas en mantener el poder del sector agrícola blanco .

Es así como los grandes terratenientes continúan poseyendo el 40% de la tierra, y si bien las poblaciones negras adquieren otro 40%, estas se encuentran en la periferia. Por otro lado, para fines de la década, el Estado logra reubicar sólo 58.000 familias en 3 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 19% son de primer valor agrario. Por lo tanto, el 40% de la población rural continúa afectada por el problema de falta de tierra.

De todas formas, obviando los resultados negativos de esta primera etapa de la reforma, el gobierno extiende la utilización del principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto” para toda la década de 1990, mediante una nueva legislación de 1992: el “Acta de Adquisición de tierras”.

Luego de la caída de la URSS y considerando una mayor intervención de los organismos de financiación internacional, en 1991 el Estado abandona el socialismo (adoptado en 1984) y profundiza la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (en adelante PAE), iniciados en la década anterior. A la par, el país se ve afectado por la sequía, fenómeno que se registra desde 1988. Estos dos aspectos, agravan la situación resultante de los acuerdos de Lancaster House.

El estado se encuentra así en una situación vulnerable. Sus reservas han sido minadas por la aplicación de las recetas de FMI, por lo que su rango de acción se ve minimizado: no puede asegurar las cosechas de los campesinos, golpeados por los malos climas, como tampoco puede adquirir más tierras para aliviar la superpoblación en las áreas comunales. La presión para acelerar y/o profundizar la reforma agraria aumenta, debido a la urgente demanda de más tierras.

Por otro lado, en el sector industrial se sufren los efectos de una economía dependiente de los mercados exteriores, sufre una caída de la producción, lo que se traduce en un aumento de las tasas de desempleo en todo el país.

Ante la incapacidad del estado para responder a estas situaciones, el apoyo al presidente y a su gestión se debilita. El primer grupo que se organiza como fuerza opositora es aquella que nuclea a los veteranos de la guerrilla, perjudicados, en el plano rural, por la falta de tierras, tanto como en el laboral por el desempleo y la falta de seguros sociales.

Los veteranos y sus reivindicaciones fueron acusados por el gobierno, en un primer momento, como una maniobra del ZAPU, partido rival política y étnicamente, para deslegitimar al régimen. Sin embargo, esta difamación se demostró falsa, ya que en 1987 ambos partidos forman un frente conjunto llamado ZANU-PF, luego del asesinato de las poblaciones ndebeles, alzadas en Matabeleland, bajo la complicidad del estado .

Ante esta pérdida de representación, grupos de veteranos de ambos partidos conforman su propia organización y se configuran como la principal fuerza de oposición. En 1988 fundan la Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWVA) , cuyos reclamos se centran en la redistribución de tierras y en el pago de pensiones. La organización crece enormemente en los espacios en los que el estado brilla por su ausencia, lo que causa que sus redes se extiendan ampliamente, abarcando variedad de clases y sectores (predominantemente rural, pero con incidencia urbana, privado y público) y a los dos principales grupos étnicos por igual.

Durante los primeros años de los '90s, se manifiestan públicamente, en las calles y en contra de los funcionarios del gobierno. Sus acciones más significativas se dan en 1997 cuando, con el apoyo de jefes locales, campesinos, espiritistas y el crucial respaldo de la burguesía negra, ejecutan una gran ocupación de tierras en Svosve y Goromonzi, enfrentándose abiertamente al gobierno. Desde entonces la ZNLWVA se acerca políticamente al Centro de Desarrollo Comercial Indígena (IBDC), el organismo que nuclea la naciente burguesía nativa, presionando al Estado desde dos fuertes sectores.

La fuerza con más arraigo urbano se concentra en el Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) , el cual es fundado en 1981, desde el interior del partido ZAPU, y funciona en el sector privado.

La organización, así como el partido, está conformada étnicamente por los grupos Ndebeles, lo que se debe a la configuración administrativa colonial la cual pretendía que la mano de obra de los sectores de servicios, industria y minería no fuera extraída de las zonas campesinas (mayoritariamente shona). Es así mismo como el carácter urbano y ndebele del ZCTU no permite su arraigo en el campo y lo enfrenta inminentemente al gobierno.

De la misma forma que el ZNLWVA, al fusionarse los partidos, los sindicatos nucleados en el congreso, se alejan del ZAPU y refuerzan su papel opositor.

Los programas económicos neoliberales, afectan también al sector industrial, tanto en el sector privado como en el sector público. El desempleo y el descenso de la calidad laboral consecuentes provocan que el tradicional sector de apoyo del gobierno de Mugabe, las clases medias urbanas, comiencen a distanciarse del partido.

A la par que los campesinos ocupan sistemáticamente las tierras, en las ciudades los obreros organizan huelgas generales que llevan a cabo entre 1996 y 1997. Con estas medidas logran captar la acción de nuevos partidarios, muchos de ellos pertenecientes al estado.

Para 1999, los altos niveles de desempleo, inflación, devaluación, la presión y el descontento de la población han llegado a su punto cúlmine, mientras que el apoyo al gobierno de Mugabe a su punto más bajo.

Estos procesos dan paso a la formación de una tercer fuerza de oposición, políticamente organizada como un partido. El Momevent for the Democratic Change (MDC), se forma el 11 de septiembre de 1999, a partir de las agrupaciones presentes en la Convención de Trabajadores, en Harare. Está principalmente compuesto por aquellas clases medias urbanas que antes se identificaban en las esferas del gobierno.

Es en este contexto que el gobierno intenta reformar la constitución de Lancaster House, principalmente en dos aspectos. El primero de ellos permitiría extender el mandato del presidente por dos períodos más, beneficiándolo con inmunidad política para él y para los líderes político-militares involucrados en crímenes tales como genocidio o fraude. La otra permitiría al gobierno profundizar la reforma agraria expropiando las tierras de los granjeros blancos sin compensación.

La propuesta fue sometida a un referendo en febrero de 2000 y, pese a que sólo se presentó el 20% del electorado, aquella fue rechazada por el 53% de los votos. Para estas fechas, la oposición estaba conformada por una enorme cantidad de fuerzas: los veteranos con sus partidarios rurales, ONG'S, los sindicatos nucleados en el ZCTU, el partido MDC, contando entre sus filas a muchos granjeros blancos, el cual difundió una campaña en rechazo de la nueva constitución. Estos grupos contaron con un gran respaldo de las instituciones financieras internacionales.

A partir de este momento, el gobierno hace un giro de 180° en su política. El discurso estatal ya no pretende ignorar las pretensiones de los grupos reformistas. En cuanto a los granjeros comerciales blancos, el gobierno considera que son prescindibles en la economía nacional, y que pueden ser reemplazados con un desarrollo mayor de las áreas comunales. Esto se ve acompañado por un endurecimiento en el trato, se los acusa de ser los culpables de la derrota en el plebiscito y en la elección parlamentaria y se trae a colación el recuerdo del pasado colonial, es decir la

apropiación ilegal de tierras por los colonos, profundizando las diferencias raciales y apelando al odio provocado por un sistema desigual e injusto.

PERÍODO INDEPENDIENTE: la reforma fast track, 2000

A partir de estos hechos, el gobierno intenta recuperar el apoyo perdido, especialmente entre la población rural. En la práctica, el gobierno no sólo frena la represión contra el movimiento rural, sino que despenaliza la ocupación de tierras.

Es el comienzo de la reforma fast track. A partir de este momento, el estado comienza a confiscar sistemáticamente las granjas comerciales, compensando sólo las mejoras producidas en ellas pero no las tierras en sí. Las confiscaciones son distribuidas entre familias de campesinos pobres, familias urbanas y aliados políticos (aunque en menor medida que la denunciada por los medios de comunicación).

En muchos casos las expropiaciones fueron muy violentas: los sistemas de riego fueron destruidos, las maquinarias expropiadas y los ex-propietarios atormentados.

De todas formas el gobierno actuó de forma apresurada y no delineó la reforma que, aunque cumplió el objetivo de redistribuir las tierras entre la población, no pudo garantizar en gran escala la distribución de maquinaria, semillas, recursos. Esto provocó que muchas de las productivas granjas comerciales perdieran su valor lucrativo y que la seguridad alimenticia, tambaleara, sumiendo al país en una crisis inmediata, en la que la hiperinflación creció a niveles exorbitantes.

Sin embargo, este desequilibrio es causado no sólo por la mala organización del gobierno, quien ya estaba débil antes de la reforma, si no también por la falta de ayuda internacional ya que, a partir de 2001, el FMI y los países de occidente habían retirado la ayuda financiera del país, como parte de un plan de sanciones.

Finalmente, podemos decir que debido a la aplicación de la reforma, el apoyo al gobierno creció inmediatamente.

CONCLUSIÓN

En este trabajo se ha querido demostrar que la problemática de la reforma agraria en Zimbabwe responde a principios más profundos de los que los medios de comunicación (y las instituciones detrás de ellos) nos demuestran.

La problemática por la que transita este país al sur de África, no puede ser analizada como consecuencia únicamente del accionar de su presidente, de quien no se niega su carácter autoritario y represivo, si no también de su pasado colonial y de la sometimiento a los designios de las instituciones financieras internacionales, tales como FMI, durante las décadas de 1980 y 1990.

El régimen colonial, continuado con el monopolio de poder blanco, provocó la consolidación de un sistema desigual, cuyas bases se mantuvieron firmes mucho tiempo después de la caída del sistema colonial. Más adelante, la aplicación de los PAE, debilitó y retrotrajo la acción del Estado, cuya consecuencia principal fue la pauperización de la población, tanto rural como urbana. Y es así como, una vez que el país se encuentra endeudado y desprovisto de la seguridad que provee un modelo económico proteccionista, las mismas instituciones prestamistas y los mismos países otrora colonialistas, le niegan la ayuda financiera.

La problemática de la reforma agraria no es para nada ajena a estas maniobras. Desde un principio, el intento de redistribución de las tierras se vio minimizado por los marcos legales de los acuerdos de Lancaster House, que no permitían una real y efectiva reforma; y, cuando este venció, los programas económicos ya hacían estragos en las arcas públicas, por lo cuál las compras de tierras eran casi imposibles.

Por otro lado, no hay que subestimar las presiones constantes dentro de la sociedad zimbabwense, llevadas a cabo tanto por los grupos más vulnerables como por los nuevos empresarios negros, los cuales esperaban una medida radical desde la independencia misma y que tuvieron principal incidencia en la toma de la decisión.

Es así como, al prescindir de la persona de Robert Mugabe como única explicación, se destapa la hipocresía de los gobiernos (occidentales) y de las instituciones financieras, ya que antes de la reforma fast track de 2000 y, mientras se cumplían al pie de la letra los edictos neoliberales, dicho personaje era el ejemplo a seguir por el resto de los gobiernos africanos.

BIBLIOGRAFÍA

Sampson, Anthony; África y el sentido común; Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1960

Ilfie, John; África, historia de un continente; Cambridge university press, España, 1998

Bertaux, Pierre; África. Desde la prehistoria a los Estados Actuales; Ed. Siglo XXI editores, Méjico, 1972

Ionescu & Gell, compiladores; Populismo; Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1970

Berry, Sara; “Debate sobre la historia y el problema de la tierra en África”; Revista Istor, África. Año IV, nº 14 otoño 2004, p. 69.

Autor desconocido, La hora de África, “De Roy Welensky a Hasting Kamutsu Banda. Múltiples tendencias en una discutida federación”.

Godwin, Peter; “Zimbabwe: tierra de nadie”, National Geographic.

“El Atlas” Le monde Diplomatique (Edición Cono Sur), Ed. Capital intelectual, Buenos Aires, 2006.

Mamdani, Mahmood, “Lesson of Zimbabwe”, en http://www.lrb.co.uk/v30/n23/mamd01_.html

González, David; “Reforma agraria en tiempos de ajuste Neoliberal: los casos de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica”, en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3.4/4_gonzalez.pdf

Darbon, Dominique; «Un succès ambigu : L'exemple du Zimbabwe » en <http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/10DARBONCRISEAGRI.pdf>

Zimbabwe's Gukurahundi: Lessons from the 1980-1988 Disturbances in Matabeleland and The Midlands Meeting Summary - 4 September 2007
Chatham House

Scoones, Ian; “A new star for Zimbabwe?” en <http://www.lalr.org.za/news/a-new-start-for-zimbabwe-by-ian-scoones.html>

Moyo, Sam, Skalness, Tor ; “Land reform and development strategy in Zimbabwe: state autonomy, class and Agrarian lobby” en *Afrika Focus*, Vol. 6, Nr. 3-4, 1990, pp 201-242

Lebert, Tom; “Backgrounder-Land and Agrarian Reform in Zimbabwe”, en <http://www.landaction.org/display.php?article=61>

Human Right Watch; “Zimbabwe, fast track land reform in Zimbabwe”. March 2002, Vol 14, No.1.